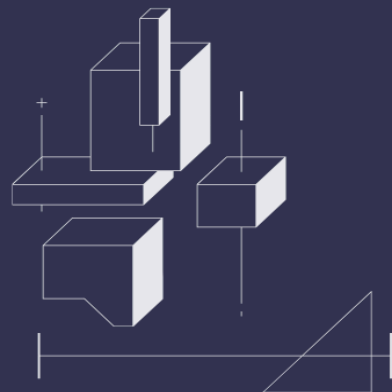


DPI EN LAC

IMPULSANDO LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
DIGITAL EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE



Infraestructura Pública Digital en Latinoamérica y el Caribe: perspectivas de Organizaciones de la Sociedad Civil

Consorcio ODC-ILDA-CEPEI

Proyecto: Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil en el Ecosistema de DPI

Open Data Charter

Natalia Carfi – Directora Ejecutiva

Mercedes de los Santos – Directora de programas y proyectos

Renato Berrino – Director de Investigación

ILDA

Gloria Guerrero – Directora Ejecutiva

Sara Fratti – Gerenta de Programas

Violeta Belver – Coordinadora de Comunicación y Comunidad

Cepei

Philipp Schönrock – Director Ejecutivo

Alexandra Roldán – Gerente Senior de Planeación Estratégica

Diana Ramírez Roa – Coordinadora de Datos

Nicolás Marín – Editor Web

Reproducción

Esta publicación puede ser reproducida en su totalidad o en parte y en cualquier forma para fines educativos o no lucrativos sin un permiso especial del titular de los derechos de autor, siempre y cuando se cite la fuente. Cepei, ODC, ILDA agradecería recibir un ejemplar de cualquier publicación que utilice el presente texto como fuente.

Septiembre 2026

➤ **Tabla de contenido**

1. Resumen ejecutivo	4
2. Hallazgos clave del estudio	5
3. Próximos pasos: Hacia una agenda de trabajo conjunto en DPI	8
4. Objetivo de estudio	10
5. Metodología de estudio y categorías de análisis	11
6. Resultados generales y por categoría de análisis	14
7. Conclusiones generales del análisis	28
8. Glosario de términos	29



1. Resumen ejecutivo

Como parte del proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en el ecosistema de Infraestructura Pública Digital en Latinoamérica y el Caribe (LAC)”, se reconoce el papel fundamental de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la configuración de ecosistemas digitales más inclusivos, participativos y orientados al valor social. Comprender cómo las OSC entienden, se apropian y se vinculan a la agenda de Infraestructura Pública Digital (DPI, por sus siglas en inglés) resulta clave para identificar oportunidades y desafíos en su desarrollo en la región.

En este contexto, las OSC no solo actúan como usuarias o beneficiarias de las soluciones de DPI, sino también como actores estratégicos en la promoción de enfoques de gobernanza que incorporen principios de participación, transparencia, rendición de cuentas y protección de derechos. Su involucramiento es especialmente relevante para asegurar que la DPI sea concebida e implementada como un sistema sociotécnico que articula tecnología, instituciones y actores y responde a las necesidades reales de la ciudadanía.

Este documento presenta el análisis de encuestas y entrevistas semiestructuradas realizadas a OSC¹ en Latinoamérica y el Caribe, cuyo objetivo era identificar el nivel de comprensión conceptual de la DPI, su grado de involucramiento en los procesos de diseño, implementación y gobernanza, así como sus percepciones sobre su capacidad de incidencia en dichos procesos. Asimismo, identifica las principales barreras, capacidades y oportunidades para fortalecer su participación en el ecosistema de DPI.

La recolección y el análisis de esta información permiten evaluar en qué medida los compromisos asociados al desarrollo de la DPI en la región se traducen en prácticas de gobernanza inclusivas, centradas en las personas y alineadas con la generación de valor. De igual manera, aporta evidencia para orientar estrategias que fortalezcan el rol de la sociedad civil en la construcción de infraestructuras digitales más equitativas, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos.

La principal conclusión que otorga este estudio es que las organizaciones de la sociedad civil participantes cuentan con interés, experiencia y capacidades iniciales para contribuir a la agenda de DPI, pero enfrentan barreras estructurales en términos de capacidades de talento humano, de financiamiento y organizacionales, que limitan su incidencia en el ecosistema de DPI. El fortalecimiento de mecanismos de gobernanza participativa y de capacidades especializadas constituye la principal oportunidad para avanzar hacia Infraestructuras Públicas Digitales más inclusivas, legítimas y centradas en las personas.

¹ En el estudio de entrevistas, participaron 26 organizaciones; entre ellas, una de academia, una Startup, una como Think-Tank, y cuatro como organizaciones sin ánimo de lucro y el restante como OSC. Para fines de este estudio, todas las organizaciones participantes se incorporan a la categoría de análisis de sociedad civil.



2. Hallazgos clave del estudio

Esta sección refleja las perspectivas de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) frente a la participación e incidencia en el ecosistema de DPI, y la permanente tensión entre el interés de participar y las capacidades y condiciones institucionales reales que habilitan una incidencia efectiva. Esta tensión se manifiesta en la disparidad de capacidades técnicas y financieras de las organizaciones, la limitada existencia de espacios multiactor para la incidencia, y las expectativas diversas frente a los beneficios y oportunidades que las DPI pueden generar para la región.

Hallazgo 1: Existe una brecha entre interés en la agenda de DPI vs las capacidades y habilitantes de incidencia

Si bien las OSC muestran un interés significativo en participar en la agenda de DPI, este no siempre se traduce en una capacidad efectiva de incidencia. Persisten limitaciones relacionadas con el acceso a información, el conocimiento técnico, la disponibilidad de recursos y la existencia de mecanismos claros y sostenidos de participación, lo que evidencia la necesidad de fortalecer tanto las capacidades de las organizaciones como las condiciones institucionales para una participación significativa.

Hallazgo 2: Existe un alto grado de familiaridad con el concepto de DPI

Más del 80% de las organizaciones tienen un alto grado de familiaridad con el concepto de DPI. La mayoría de las OSC entrevistadas, asocian este concepto no solo con componentes tecnológicos como identidad digital, intercambio de datos y pagos digitales, sino también con dimensiones de gobernanza, derechos humanos, participación, soberanía digital, generación de conocimiento compartido y desarrollo de infraestructuras críticas comunes como centros de datos e infraestructuras de datos.

Hallazgo 3: Persiste un debate abierto sobre el significado de lo “público” en DPI

La comprensión del carácter público de DPI también es bastante heterogénea entre las OSC. A nivel general, se identifica que el término público de DPI convoca elementos como el interés público, el acceso universal a servicios, el bien común, la intervención del gobierno en el desarrollo de infraestructura, la promoción de principios como la equidad, así como la garantía y suma de derechos humanos. Sin embargo, existe una fuerte tensión entre el carácter público de DPI y aspectos como la soberanía tecnológica, la gobernanza digital y el rol del sector privado como prestador de infraestructura.

Hallazgo 4: Oportunidades y limitaciones de LAC para el desarrollo de DPI

La dependencia tecnológica de la región, la falta de capacidades técnicas y tecnológicas, el extractivismo digital, la falta de sostenibilidad de iniciativas y la ausencia de soberanía digital se presentan como limitaciones de la región en el desarrollo de DPI. En materia de oportunidades, el conocimiento e incidencia en datos abiertos e información pública, los conocimientos y prácticas propias desde el Sur Global, y la fuerte incidencia de las OSC se resaltan como aspectos positivos de la región.

Hallazgo 5: Alto interés de las OSC en la agenda de DPI

Las organizaciones participantes consideran que la agenda de DPI es altamente relevante para su misión institucional, dada su conexión con temas como los datos abiertos, la infraestructura de datos, el software libre, los derechos digitales y las políticas públicas. Este interés se traduce en una amplia disposición para participar en procesos de gobernanza y articulación regional, lo que representa una oportunidad para fortalecer mecanismos de colaboración multiactor, redes de conocimiento y comunidades de práctica en torno a estas infraestructuras.

Hallazgo 6. La gobernanza participativa de DPI es incipiente

Frente a los espacios de gobernanza, las OSC consideran que son procesos incipientes en la región. La mayoría no conoce espacios de participación y no considera que sean altamente efectivos para la generación de incidencia. En las entrevistas, se mencionó la importancia de la confianza entre diferentes actores, la apertura y transparencia de procesos, y la colaboración como elementos clave para lograr desarrollar procesos efectivos de participación conjunta. El sector público se identifica como el actor con mayor representación en espacios de participación de políticas digitales, lo que demuestra su rol estratégico para habilitar mecanismos de participación multiactor.

Hallazgo 7: Casos de uso reflejan el impacto de infraestructuras críticas para LAC

Pix, Bre-B, y RENIEC se identifican como los casos de estudio más reconocidos por las OSC en la región. El nivel de adopción ciudadana se identifica como una característica central para dimensionar el impacto de estas infraestructuras como críticas y la oportunidad, para algunas OSC, de desarrollar soluciones de infraestructura. Entre los riesgos identificados en los casos de uso globales y regionales, se identifican las limitaciones de participación de la sociedad civil en el diseño de la solución, la falta de consultas públicas, procesos de transparencia y los limitados espacios de gobernanza.

Hallazgo 8: Limitadas capacidades para participar en el ecosistema de DPI

Persisten importantes barreras a una participación efectiva en los procesos de DPI. A pesar del interés existente, las organizaciones identifican limitaciones asociadas a los

recursos financieros, las capacidades técnicas especializadas, el acceso a la información y la participación en los espacios de toma de decisiones. Esto evidencia una brecha entre el reconocimiento de la importancia de las DPI y las capacidades disponibles para influir en su diseño, implementación y supervisión.

Hallazgo 9: Existe consenso sobre la necesidad de fortalecer salvaguardas

Si bien las OSC reconocen el potencial transformador de la DPI también expresan preocupaciones relacionadas con la protección de datos personales, la vigilancia, la exclusión digital, la falta de transparencia y los posibles impactos sobre los derechos humanos. En consecuencia, existe un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer los marcos de gobernanza participativa, los mecanismos de rendición de cuentas y las salvaguardas que garanticen una implementación centrada en las personas.



3. Próximos pasos: Hacia una agenda de trabajo conjunto en DPI

A partir de los hallazgos, se identifican una serie de aspectos que requieren una mayor profundización por parte del Consorcio, conformado por Cepei, ILDA y Open Data Charter, durante las siguientes fases del proyecto de DPI durante el año 2026. La mayoría de estas cuestiones se abordarán a través de los estudios de caso, los encuentros de gobernanza multiactor en Colombia y en Guatemala, así como los talleres de incidencia y gobernanza que se desarrollarán con Sociedad Civil. Al finalizar el proyecto, estos elementos de trabajo conjunto se plasmarán en una serie de recomendaciones de política y un llamado a la acción multiactor que contribuya a fortalecer el ecosistema de DPI en LAC.

Avanzar hacia una narrativa regional común sobre DPI desde la sociedad civil

Los hallazgos sugieren la importancia de profundizar en la construcción de una narrativa regional sobre DPI que incorpore perspectivas de derechos, inclusión, interoperabilidad, transparencia y valor público. Esta narrativa podría, además, establecer conexiones con agendas en las que la sociedad civil ya cuenta con experiencia, como los derechos digitales, los datos abiertos, el gobierno abierto, la transparencia, la participación ciudadana, la protección de datos, la Inteligencia Artificial (IA) y los servicios públicos digitales.

Profundizar en el alcance y rol de la comunidad de práctica de DPI

La demanda identificada por espacios de intercambio y articulación plantea la necesidad de explorar la función y alcance de la comunidad de práctica regional. Entre las funciones que podrían analizarse, se encuentran el aprendizaje y fortalecimiento de capacidades, el intercambio de experiencias y casos, la producción colectiva de conocimiento, el seguimiento de iniciativas de DPI y la articulación de posiciones para espacios nacionales, regionales y multilaterales.

Profundizar en las brechas de capacidades y conocimientos en las OSC

Las organizaciones no solo requieren conceptos generales. Necesitan comprender cómo funcionan la identidad digital, los pagos digitales, el intercambio de datos, las APIs, la interoperabilidad, las compras públicas, la ciberseguridad, la gobernanza de datos y los marcos de mitigación de riesgos.

Analizar mecanismos y alternativas de financiamiento para fortalecer la participación de sociedad civil

El financiamiento se presenta como el principal cuello de botella. Los procesos de DPI deberían incluir recursos para la investigación independiente, la veeduría, la auditoría ciudadana, la participación en mesas técnicas, el análisis de impacto y el acompañamiento a las comunidades potencialmente afectadas.

Explorar mecanismos y procesos de participación multiactor sostenibles y estructurados

Las respuestas muestran desconfianza ante espacios consultivos esporádicos. Se recomienda promover mecanismos con reglas claras, trazabilidad de los aportes, acceso a la información técnica, participación desde fases tempranas, criterios de inclusión y mecanismos de rendición de cuentas.

Desarrollar una agenda regional de evidencia y aprendizaje compartido

Varias organizaciones solicitan estudios comparativos, pilotos y aprendizajes regionales. Una línea útil sería mapear casos como Pix, Gov.br, identidad digital, interoperabilidad, datos abiertos, contratación pública digital y estrategias nacionales o subnacionales de servicios digitales.

Profundizar en salvaguardas y enfoques de gestión de riesgos

La priorización de la privacidad, la discriminación, la exclusión, la seguridad digital y el acceso desigual indica que una agenda regional de DPI debe incorporar evaluaciones de impacto, auditorías, gobernanza de datos, seguridad, transparencia contractual y mecanismos de reparación.



4. Objetivo de estudio

El objetivo general de este estudio es analizar el nivel de conocimiento, interés y percepción sobre la incidencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en los procesos de diseño, implementación y gobernanza de la Infraestructura Pública Digital en Latinoamérica y el Caribe.

Objetivos específicos:

- Identificar el grado de comprensión conceptual de la DPI y sus componentes clave, por parte de la sociedad civil.
- Caracterizar el nivel de incidencia y participación de las OSC a lo largo del ciclo de vida de la DPI.
- Analizar las barreras técnicas, institucionales, políticas y financieras que limitan la participación significativa de las OSC en el diseño e implementación de DPI.
- Identificar las capacidades existentes de las OSC para una participación informada y sostenible.
- Identificar casos de uso locales y regionales en materia de DPI, impulsados por OSC.
- Analizar riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y derechos digitales de la ciudadanía derivados de la implementación de DPI
- Identificar recomendaciones de las OSC para fortalecer los enfoques participativos y las salvaguardas en el DPI.



5. Metodología de estudio y categorías de análisis

El estudio adopta un método de investigación mixto, apoyado en un análisis cuantitativo y cualitativo, orientado a mapear de manera integral el entendimiento, el grado de involucramiento y las capacidades de la sociedad civil en relación con la DPI en Latinoamérica y el Caribe. Siguiendo a Bericat (1998), este diseño corresponde a una estrategia de triangulación metodológica, en la cual los métodos cuantitativos (A) y cualitativos (B) se orientan hacia un mismo objetivo analítico. Ambos enfoques no se conciben como fases aisladas, sino como componentes complementarios que permiten contrastar, validar y enriquecer los hallazgos.

El enfoque mixto resulta especialmente pertinente para el análisis de la DPI. Al tratarse de un fenómeno sociotécnico complejo e incipiente en Latinoamérica y el Caribe, se vuelve necesario combinar evidencia proveniente de encuestas, complementada con un análisis de percepciones, experiencias y dinámicas institucionales derivados de las entrevistas semiestructuradas.

La población objetivo, tanto para las encuestas como para las entrevistas semiestructuradas, estuvo conformada por OSC con incidencia nacional o regional en Latinoamérica y el Caribe, que trabajan en asuntos de derechos digitales y derechos humanos, gobernanza y privacidad de datos, inclusión digital, transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas, innovación cívica y tecnología para el bien público, transformación digital e IA.

Método	Descripción
Cuantitativo- Encuesta en línea	El propósito de la encuesta es capturar, procesar y analizar información relacionada con el grado de conocimiento, participación, e involucramiento de las organizaciones de sociedad civil en el desarrollo de DPI en Latinoamérica y el Caribe. A partir de un cuestionario estructurado, se analizan de manera sistemática, los conocimientos, intereses, barreras y limitaciones que enfrentan las OSC en relación con su participación en la DPI. Se compone de 10 módulos temáticos, constituidos por 51 preguntas. Ver anexo 1. Formulario en Excel

Cualitativo-Entrevista semiestructurada	El componente cualitativo se desarrolla mediante entrevistas semiestructuradas individuales, caracterizadas por su flexibilidad, lo que permite ajustar y profundizar los ejes de indagación a partir de los hallazgos emergentes en cada una . Se compone de 14 preguntas realizadas en un tiempo aproximado de entre 45 minutos y una hora. Ver anexo 2. Cuestionario de la entrevista
--	---

5.1 Población objetivo y selección de la muestra

Para el proceso de selección de las organizaciones sociales de la sociedad civil participantes en el estudio, se partió de un mapeo inicial en el que se tuvo en cuenta OSC con alcance nacional y regional, inmersas en la agenda digital, en temas relacionados con derechos digitales, transparencia y democracia digital, política pública, desarrollo de soluciones digitales, inclusión digital, regulación de tecnologías de la información y activismo digital. Para la realización de las 12 entrevistas, se tuvo en cuenta, líderes y lideresas de OSC que tuvieran un mayor grado de involucramiento en la agenda de DPI² dado que el objetivo era profundizar en el análisis de narrativas alrededor del concepto de DPI.

Método	Muestra	Cobertura geográfica	Periodo de recolección de información
Cuantitativo-Encuesta en línea	26 organizaciones de sociedad civil	México, Colombia, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Argentina, Chile, Bolivia, República Dominicana, Uruguay y Perú.	marzo y abril de 2026
Cualitativo-Entrevista semiestructurada	12 organizaciones de sociedad civil	República Dominicana, México, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Paraguay, Guatemala.	abril y mayo de 2026

² El muestreo empleado en este estudio corresponde a un muestreo intencional no probabilístico. Por tanto, los resultados no son estadísticamente representativos del universo de organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica y el Caribe que trabajan en temas digitales. En consecuencia, los hallazgos deben interpretarse como tendencias analíticas no representativas. Asimismo, la DPI constituye un enfoque relativamente emergente en la región, lo que puede producir diferencias sustanciales en el nivel de comprensión conceptual y técnica entre los entrevistados y encuestados. Esta heterogeneidad en el conocimiento puede traducirse en brechas de percepción, entendimiento y opinión considerablemente desiguales entre los participantes.

5.2 Categorías de análisis

A partir de la revisión de la literatura y la documentación disponible a nivel regional y global respecto al DPI, sus elementos, componentes y conceptos, se definieron los siguientes ejes temáticos de investigación:

- **Entendimiento de la Infraestructura Pública Digital (DPI):** Nivel de comprensión que tienen los actores sobre la DPI y su nivel de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe.
- **Oportunidades y desafíos de DPI en LAC:** Identificar los riesgos y las oportunidades que ofrece Latinoamérica y el Caribe para el desarrollo de DPI.
- **Motivaciones e intereses de participación en la Infraestructura Pública Digital (DPI):** Intereses, motivaciones, aspiraciones y expectativas de las OSC respecto a su participación futura en los procesos de diseño, implementación, gobernanza y supervisión de la DPI.
- **Participación de las OSC en el ciclo de vida de la DPI:** Identificación de las formas y los mecanismos de participación de la sociedad civil en las distintas etapas del ciclo de vida de la DPI.
- **Gobernanza y ecosistema de DPI en la región:** Identificación de espacios y procesos, diálogos y actores que determinan las decisiones en el desarrollo de DPI.
- **Casos de uso e iniciativas de DPI en la región:** Identificación de experiencias concretas, iniciativas, proyectos relacionados con DPI en Latinoamérica y el Caribe.
- **Capacidades y barreras para la participación en DPI:** Identificación de capacidades técnicas, legales, organizacionales y políticas para participar de manera significativa en procesos de DPI, así como de los factores que limitan la participación efectiva en DPI.
- **Habilitadores de DPI y bienes públicos digitales:** Identificación de áreas de trabajo de la sociedad civil, en el desarrollo de recursos o bienes públicos digitales como software de código abierto, datos abiertos, estándares abiertos, contenido abierto y marcos normativos habilitantes, que sostienen y habilitan el desarrollo de DPI en la región.
- **Garantías, riesgos y derechos humanos:** Percepciones y experiencias relacionadas con los riesgos e impactos de la DPI sobre los derechos humanos y las salvaguardas existentes.



6. Resultados generales y por categoría de análisis

El análisis se basa en una muestra de 26 OSC y en 12 entrevistas semiestructuradas realizadas a líderes y lideresas de organizaciones de la sociedad civil de LAC. Si bien la muestra no es representativa, su valor radica en ofrecer una lectura general y estratégica del ecosistema de DPI en la región que contribuya a la generación de conclusiones y recomendaciones.

Las 26 organizaciones participantes provienen de 11 países de Latinoamérica y el Caribe: México (6), Colombia (4), Ecuador (4), Brasil (2), Costa Rica (2), Argentina (2) y Chile (2), Bolivia, República Dominicana, Uruguay, y Perú (1 cada uno). En cuanto a diversidad temática, las organizaciones trabajan en áreas que incluyen transparencia y democracia digital, derechos digitales, política pública, desarrollo de soluciones digitales, inclusión digital, regulación de tecnologías de la información y activismo digital, entre otras. En términos de alcance geográfico, el 46% opera a nivel nacional, el 27% a nivel regional y el 27% a nivel global. Una distribución que permite captar diversas perspectivas dentro de la misma muestra.

El perfil temático confirma que la muestra se ubica en la intersección entre los derechos digitales, la transparencia, la política pública, la inclusión digital y el desarrollo de soluciones digitales. Las áreas más frecuentes son transparencia y democracia digital (81%), política pública (80%), derechos digitales (73%), desarrollo de soluciones digitales (54%), regulación de TIC (54%) e inclusión digital (46%). Esto es relevante porque indica que la agenda de DPI puede conectarse con comunidades ya activas en datos abiertos, gobierno abierto, derechos digitales, tecnología cívica, protección de datos y participación ciudadana.

Lectura general del ecosistema de DPI

Los resultados evidencian que Latinoamérica y el Caribe cuentan con una sociedad civil interesada y comprometida, relevante para contribuir al desarrollo de Infraestructuras Públicas Digitales (DPI). Las organizaciones participantes muestran un alto nivel de familiaridad con la agenda y reconocen su estrecha relación con temas como derechos digitales, transparencia, datos abiertos, gobernanza de datos, la inclusión digital y fortalecimiento institucional.

Sin embargo, el estudio revela una brecha significativa entre el interés existente y la capacidad real de incidencia en los procesos de diseño, implementación y gobernanza de DPI. Si bien las organizaciones cuentan con experiencia acumulada en áreas estratégicas para el desarrollo de estas infraestructuras, persisten limitaciones asociadas a las capacidades técnicas especializadas, a la sostenibilidad financiera y al acceso a mecanismos institucionalizados de participación. Como resultado, la participación de la sociedad civil de la

muestra analizada continúa concentrándose, principalmente, en funciones de incidencia, veeduría y cocreación con una presencia más limitada en espacios de toma de decisiones o en el diseño técnico de soluciones.

En este contexto, el principal desafío para la región no radica en ampliar el conocimiento o la sensibilización sobre la DPI, sino en crear las condiciones que permitan transformar el interés y las capacidades existentes en una participación efectiva y sostenida. Esto implica fortalecer capacidades especializadas, promover mecanismos de gobernanza multiactor con reglas claras y espacios permanentes de diálogo, así como desarrollar estrategias de financiamiento que permitan una participación más equitativa a lo largo del ciclo de vida de las infraestructuras.

En conjunto, los hallazgos sugieren que la principal oportunidad para avanzar hacia ecosistemas de DPI más inclusivos, legítimos y centrados en las personas consiste en reducir la brecha de incidencia que actualmente enfrenta la sociedad civil, reconociéndose no solo como beneficiaria de estas infraestructuras, sino también como un actor clave en su gobernanza, supervisión y sostenibilidad.

6.1 Entendimiento de la DPI

Familiaridad de las OSC con el concepto de DPI

Las organizaciones encuestadas muestran una familiaridad relativamente alta con el concepto de DPI. El promedio de familiaridad es de 4,0 sobre 5. En conjunto, el 81% de las organizaciones reportó niveles altos de familiarización (4 o 5), lo que sugiere que la mayoría de las organizaciones participantes ya cuentan con una comprensión inicial o avanzada del concepto de DPI.

El análisis por alcance geográfico muestra altos niveles de familiarización con el concepto de Infraestructura Pública Digital (DPI) en los tres grupos de organizaciones analizados. Las organizaciones de alcance nacional y regional presentan el promedio más alto de familiaridad, seguidas por las organizaciones de alcance global. Sin embargo, las diferencias observadas entre los grupos son moderadas y todos se sitúan por encima del nivel medio de la escala. Esto evidencia una apropiación relativamente amplia del concepto por parte de las organizaciones participantes.

Con base en los 26 registros de la encuesta y considerando que las organizaciones podían seleccionar más de un área temática, los niveles más altos de familiarización con el concepto de DPI se observan entre las organizaciones que trabajan en inclusión digital (promedio 4,17 sobre 5), derechos digitales (promedio 4,16) y regulación de Tecnologías de la Información (TI) (promedio 4,15). Les siguen las organizaciones vinculadas al activismo digital (promedio 4,12) y aquellas enfocadas en la transparencia y la democracia digital (promedio 4,0; 81% en los niveles 4-5). En general, los resultados sugieren que las organizaciones con experiencia en derechos digitales, inclusión digital y regulación tecnológica presentan una mayor cercanía

conceptual con las Infraestructuras Públicas Digitales, lo que podría constituir una base relevante para fortalecer procesos de participación e incidencia en la gobernanza de DPI en la región.

La relevancia de DPI para la misión organizacional también es alta: el 81% de las OSC la ubican en niveles de 4 o 5 de importancia. En este sentido, existe una base favorable para ampliar la participación de la sociedad civil en los procesos de diseño, implementación y gobernanza de DPI en Latinoamérica y el Caribe.

Las asociaciones conceptuales más frecuentes con DPI son la identidad digital (92%), el intercambio de datos (89%), los pagos digitales (85%) y las firmas electrónicas (69%). Sin embargo, en algunas entrevistas, se menciona que abordar la definición de DPI desde los tres principales bloques tecnológicos puede resultar limitante en la medida en que pueden integrarse muchos más servicios para su comprensión conceptual.

Un análisis diferenciado por alcance geográfico revela que, si bien el promedio de familiarización es homogéneamente alto, la percepción de la relevancia de DPI para la misión organizacional diverge. Las organizaciones de alcance regional y nacional presentan niveles de relevancia percibida más altos (4,29 y 4,25, respectivamente); mientras, las organizaciones globales reflejan una valoración menor (3,86).

Este hallazgo podría sugerir que las organizaciones con una mayor vinculación a contextos nacionales identifican con mayor claridad el potencial de las DPI como herramienta para la provisión de servicios públicos, la inclusión digital y la garantía de derechos. No obstante, dada la escasa cantidad de observaciones por categoría, estos resultados deben interpretarse como tendencias exploratorias y no como patrones concluyentes.

Conocimiento de iniciativas de capacitación

Frente a iniciativas de capacitación en DPI, el 35% de las organizaciones dicen conocer recursos específicos, el 46% han escuchado sobre algunos recursos sin conocerlos en detalle y el 19% no conocen recursos disponibles para fortalecer los conocimientos en DPI. Esto muestra una brecha importante: existe interés y familiaridad general con el concepto de DPI, pero aún falta consolidar y socializar una oferta regional clara, accesible y práctica de formación en DPI.

Tres debates conceptuales emergentes

En relación con las entrevistas, se evidenció que la comprensión del concepto de DPI es heterogénea. En particular, emergen tres debates principales: (i) si la DPI constituye un concepto verdaderamente nuevo en Latinoamérica y el Caribe o si configura agendas preexistentes; (ii) qué condiciones determinan que una infraestructura digital pueda considerarse genuinamente “pública”; y (iii) si la región se encuentra en una fase de avance consolidado o en un proceso aún emergente en materia de DPI.

¿DPI es realmente una agenda nueva?

En las entrevistas, se identificó que el concepto de DPI puede interpretarse como soluciones digitales provistas por los gobiernos en LAC o iniciativas desarrolladas en el marco de Gobierno Digital o Transformación Digital Pública. En ese mismo sentido, en algunos casos, se entiende que DPI tiene como base la infraestructura de datos que a su vez habilita la prestación de otros servicios y que puede ser entendida como una infraestructura de conocimientos compartidos.

¿Qué significa que una infraestructura sea pública?

Frente al concepto de lo “Público” en DPI, existen algunas discrepancias. Algunos entrevistados mencionan un conflicto conceptual al hablar de Infraestructura Pública Digital en economías donde la infraestructura tecnológica es provista en muchos casos por el sector privado. De manera general, se relaciona en las entrevistas el carácter público de DPI con aspectos de interés público, beneficios universales para la ciudadanía, acceso universal por parte de todas y todos, un sistema habilitador de derechos e inclusive el factor de gratuidad en el acceso y prestación de servicios digitales.

El factor de lo *público* también se enfrenta a asuntos de gobernanza y soberanía digital en los que se aborda con preocupación la alta dependencia tecnológica de la región, la tercerización de la infraestructura tecnológica y la falta de capacidad de los gobiernos para sostener de manera efectiva dichas infraestructuras.

¿Está LAC consolidando su DPI apenas comenzando a construirla?

Frente al nivel de apropiación de DPI en la región, las opiniones también son diversas. En algunos casos, se piensa que es una agenda que viene avanzando en LAC desde hace más de 15 años y que muchas soluciones digitales implementadas en la región podrían llamarse DPI. En otros casos, se considera que LAC es incipiente en materia de DPI y que la digitalización no implica necesariamente contar con Infraestructuras Públicas Digitales.

6.2 Oportunidades y desafíos de DPI en LAC

Oportunidades desde LAC

Las entrevistas evidencian que LAC cuenta con condiciones favorables para impulsar la agenda de DPI. Una de las principales fortalezas identificadas es la trayectoria acumulada de la región en temas como los datos abiertos, la información pública y la transparencia, los derechos digitales y la participación ciudadana. La existencia de comunidades activas desde la sociedad civil en la agenda digital constituye una base relevante para la región.

Asimismo, las entrevistas destacaron la importancia de consolidar una agenda de DPI desde un enfoque del Sur Global, aprovechando los aprendizajes y los contextos que enfrentan desafíos similares en materia de inclusión social, acceso desigual a servicios públicos, informalidad económica y brechas digitales. Las experiencias desarrolladas en países como India y Brasil son percibidas como referentes valiosos para la región no solo por sus

resultados, sino también por la cercanía de sus contextos para una implementación efectiva. Esto abre oportunidades para fortalecer los mecanismos de cooperación Sur-Sur y promover modelos de DPI más inclusivos.

Adicionalmente, factores como la afinidad cultural y lingüística entre la mayoría de los países de la región, así como la existencia de redes regionales y comunidades de datos, se consideran elementos clave para fortalecer el desarrollo sostenible de DPI. Por último, el contexto social y económico de LAC habilita un espacio crítico para cuestionar los modelos tecnológicos predominantes y proponer enfoques alternativos que fortalezcan la inclusión social y respondan a las necesidades de poblaciones históricamente excluidas.

Desafíos regionales

A pesar de las oportunidades, las OSC identifican importantes desafíos para el desarrollo sostenible de DPI en la región. Entre los más recurrentes, se identifica la alta dependencia de la región de infraestructuras tecnológicas, de proveedores globales y de Big Tech. Esto introduce tensiones respecto de la soberanía digital y la autonomía tecnológica de la región, lo cual incrementa las preocupaciones sobre la protección de datos personales, la concentración tecnológica y la vigilancia.

De igual manera, las personas entrevistadas mencionaron que LAC enfrenta una brecha significativa en materia de capacidades y de talento digital. Esto conlleva riesgos de exclusión social y de discriminación de poblaciones vulnerables. En este sentido, la persistencia de desigualdades sociales, económicas y territoriales constituye un desafío transversal para garantizar que los beneficios de la DPI alcancen de manera equitativa a toda la población.

En relación con asuntos institucionales y regulatorios, varias personas entrevistadas manifestaron preocupaciones sobre la falta de confianza institucional y el incremento de gobiernos más autoritarios, que reducen o limitan la participación de la sociedad civil, no solo en la agenda digital, sino también en otros frentes como el género o el cambio climático. A ellos, se le suma la ausencia de regulación en algunos países en materia de protección de datos personales, lo cual puede limitar la construcción de Infraestructuras Públicas Digitales que garanticen transparencia, rendición de cuentas y protección efectiva de los derechos humanos.

6.3 Participación de las OSC en el ciclo de vida de la DPI

Los resultados muestran que las organizaciones participantes ya desarrollan iniciativas relacionadas con Infraestructura Pública Digital en Latinoamérica y el Caribe, en materia de datos abiertos, derechos digitales, entre otras.

Dieciocho de 26 organizaciones reportan haber participado o realizado acciones de incidencia en iniciativas relacionadas con investigación, gobernanza democrática de datos, datos abiertos, interoperabilidad, identidad digital, evaluación de impacto en derechos

humanos, participación en compromisos de Estado Abierto, tecnología cívica, innovación pública y desarrollo de plataformas de transparencia o de contratación pública.

Tipos de participación y espacios

La participación se concentra principalmente en las etapas iniciales del ciclo de vida de DPI. El 61% de las OSC manifestó haber participado en procesos de estrategia y diseño; mientras, el 50% en las etapas de concepción y delimitación. En contraste, únicamente el 6% manifestó haber participado en las etapas de operación y mantenimiento. Asimismo, el 72% manifestó haber participado de manera consultiva, y el 61% en incidencia normativa y regulatoria. Esto sugiere que la contribución de la sociedad civil continúa orientándose principalmente a la generación de recomendaciones, acompañamiento técnico y veeduría.

Las experiencias de participación se han dado principalmente a través de mesas técnicas, espacios formales de gobierno, iniciativas impulsadas por las propias organizaciones, así como comités o instancias interinstitucionales. Este patrón revela una doble dinámica: por un lado, la existencia de capacidades y trayectorias de incidencia; por otro, la persistencia de condiciones en las que muchas de estas experiencias dependen de oportunidades puntuales, consultorías o esfuerzos autónomos más que de mecanismos institucionalizados, sostenibles y financiados que garanticen una participación estructurada en el ecosistema de DPI.

Un hallazgo particularmente relevante es la posible brecha entre la percepción de participación en la agenda de DPI y el involucramiento efectivo en iniciativas concretas. Aunque una proporción significativa de organizaciones reporta haber participado en acciones relacionadas con DPI, al indagar en casos específicos de implementación en la región, la mayoría manifestó no conocer experiencias concretas o no haber participado directamente en ellas. Entre las organizaciones que sí identificaron casos de uso, más del 60% señaló no haber participado en su diseño, implementación o gobernanza. Esto sugiere que, en muchos casos, la participación se produce de manera indirecta a través de actividades de incidencia, investigación o acompañamiento sin traducirse necesariamente en una intervención directa en soluciones específicas de DPI.

Por último, en las entrevistas, se evidenció que las OSC han desempeñado principalmente un rol consultivo; especialmente, en las fases iniciales de diseño de las soluciones de DPI. No obstante, se señaló que, en muchos casos, su participación ocurre de manera tardía cuando los problemas y enfoques ya han sido definidos. Lo anterior, limita su capacidad de incidir de forma sustantiva en las decisiones clave. Asimismo, se observa una participación reducida en las etapas de implementación y evaluación. Finalmente, se destacó que las OSC enfrentan limitaciones de capacidad técnica, institucionales y de recursos que dificultan su involucramiento a lo largo de todo el ciclo de vida de la DPI, las cuales se profundizarán en secciones posteriores de este documento.

6.4 Motivaciones e intereses de participación en la Infraestructura Pública Digital (DPI)

Interés en la agenda de DPI y motivaciones para participar

La demanda de participación futura en la agenda de DPI es notablemente alta. El interés promedio para participar en iniciativas de DPI es de 4,5 sobre 5, y el interés promedio en los procesos de capacitación es de 4,5. Entre las principales motivaciones para incidir en el ecosistema de DPI, se destaca la preocupación por mitigar posibles afectaciones a los derechos humanos y por reducir las brechas sociales que podrían profundizar con la implementación de estas soluciones. Asimismo, las OSC manifiestan interés en dar continuidad a iniciativas previas de datos abiertos, participar en procesos de codiseño de soluciones de DPI y acceder a financiamiento para desarrollar proyectos en el marco de esta agenda emergente.

En algunas de las entrevistas, se mencionó que hay interés en participar en la agenda de DPI por temas *de financiamiento y de potenciales beneficios para las poblaciones más vulnerables*: “Para mí, el incentivo mayor es el alcance del nivel de incidencia, ese es el resultado de una democracia participativa” y “Para mí, la mayor motivación a participar es que la promesa de DPI se cumpla”.³

Ámbitos prioritarios de participación

Entre los ámbitos de mayor interés en participar, se encuentran los aspectos de gobernanza (88%) que incluyen fortalecimientos de espacio multiactor y supervisión y veeduría de soluciones, los aspectos sociales (85%) que incluyen actividades de alfabetización digital, defensa de derechos digitales y acompañamiento a personas vulnerables y, finalmente, aspectos normativos (69%) que incluyen la incidencia en regulación y marcos normativos, así como en el diseño de políticas públicas digitales.

Los sistemas de intercambio de datos (85%) son el bloque digital que suscita mayor interés en las OSC frente a una participación futura en DPI en relación con el bloque de identidad digital (62%) y el de pagos (23%).

Interés en redes de conocimiento y fortalecimiento de capacidades

La mayoría de las organizaciones expresan algún grado de interés en formar parte de una red regional de conocimiento: 18 con alto interés, 6 con interés moderado y 2 condicionadas al alcance. Las comunidades de práctica o redes de conocimiento (62%) se identifican como el formato de fortalecimiento de capacidades preferido, seguido de guías prácticas y toolkits (58%), así como el de cursos virtuales asincrónicos (58%).

Las formas de participación en una red de conocimiento futura combinan incidencia colectiva en marcos regulatorios, intercambio de buenas prácticas, aprendizaje entre pares,

³ Frase tomada literalmente de una de las entrevistas del estudio

participación en eventos regionales, producción conjunta de análisis y seguimiento de iniciativas de DPI. Esto sugiere que una comunidad de práctica no debería limitarse a la formación conceptual: tendría mayor valor si, en fases posteriores, se articularan la producción de conocimiento, el monitoreo, el posicionamiento regional y las rutas de incidencia.

Etapas del ciclo de vida donde existe mayor interés en participar

Frente a las etapas de incidencia de mayor interés para las OSC, se encuentran las etapas de estrategia y diseño (77%), de concepción y delimitación (65%), de veeduría y seguimiento (65%), de auditoría técnica o contractual (27%), desarrollo (27%), despliegue (23%), operación y mantenimiento (19%) y todas las anteriores (8%).

Este patrón es consistente con los hallazgos presentados en la sección anterior y sugiere que las OSC se perciben principalmente como actores con capacidad para contribuir a la definición de prioridades, la supervisión y la gobernanza de las DPI, más que al desarrollo tecnológico o a la operación de las soluciones.

6.5 Gobernanza y ecosistema de DPI en la región

Grado de madurez de procesos de gobernanza de DPI

De acuerdo con las entrevistas realizadas, los procesos de gobernanza de DPI en la región son bastante incipientes, pues no se cuenta con mayor claridad sobre espacios formales y sostenibles de participación multiactor que resulten efectivos para abordar el ciclo de vida de DPI. Así mismo, en las entrevistas algunas personas manifestaron que los espacios que existen, únicamente se le da voz a las OSC desde un rol consultivo: *“En LAC, los espacios de participación para que la sociedad civil incida en la gobernanza de DPI todavía son limitados, fragmentados y, en muchos casos, más consultivos que vinculantes.”*

Dinámicas de participación e influencia en el ecosistema de DPI

Las OSC consideran que los actores con mayor influencia en el desarrollo de sistemas digitales son, principalmente, entidades del sector público (88%), empresas privadas locales (73%), proveedores tecnológicos globales (50%) y bancos multilaterales de desarrollo (50%).

Esta lectura es importante porque ubica a la DPI como un campo de gobernanza distribuida en el que las decisiones no dependen únicamente del gobierno, sino también de otros actores. En este caso, el principal reto en materia de gobernanza es ampliar el liderazgo de otros actores distintos al sector privado, identificar incentivos para su participación y desarrollar estrategias de colaboración horizontal.

Conocimiento y efectividad de espacios de discusión

El conocimiento de los mecanismos de participación asociados a DPI sigue siendo limitado. El 58% de las OSC manifestó no tener conocimiento de espacios de participación ciudadana relacionados con DPI. Esta tendencia se observa en los tres niveles geográficos analizados: las organizaciones de alcance regional presentan el mayor nivel de conocimiento con un 43% de

respuestas afirmativas, seguidas por las organizaciones de alcance nacional (33%) y las de alcance global (29%).

Resulta particularmente llamativo que las organizaciones de alcance global reporten el menor nivel de conocimiento sobre estos espacios. Esto podría sugerir que, si bien estas organizaciones participan en debates internacionales sobre gobernanza digital, no necesariamente identifican mecanismos específicos de participación vinculados a las DPI en Latinoamérica y el Caribe, o bien mantienen estándares más exigentes respecto a lo que consideran un espacio formal y efectivo de participación.

La percepción de la efectividad de los mecanismos existentes es moderada-baja: el promedio es de 2,6 sobre 5. Las respuestas cualitativas señalan que muchos de estos espacios son esporádicos, poco institucionalizados y cuentan con capacidades limitadas para generar incidencia efectiva. En consecuencia, los desafíos actuales no parecen estar asociados únicamente a la existencia de espacios de participación, sino también a su capacidad para incorporar perspectivas diversas, garantizar procesos transparentes y traducir la participación en decisiones concretas de gobernanza.

La percepción de la efectividad de los mecanismos de participación existentes en los procesos de DPI varía según el alcance geográfico de las organizaciones. Las organizaciones de alcance regional presentan la valoración más favorable con un promedio de 3,0 sobre 5, lo que indica una percepción moderada de efectividad. Les siguen las organizaciones de alcance nacional con una valoración de 2,67; mientras, las organizaciones de alcance global registran la percepción más baja (2,14), ubicándose cerca de los niveles de baja efectividad.

Este hallazgo resulta particularmente interesante porque contradice la idea de que una mayor exposición internacional necesariamente se traduce en una mejor percepción de los mecanismos de gobernanza existentes. Por el contrario, las organizaciones con alcance global parecen ser más críticas respecto de la capacidad real de estos espacios para incorporar la participación de la sociedad civil e influir en las decisiones relacionadas con las DPI.

Procesos de gobernanza más participativos

Frente a este escenario, las OSC manifiestan una clara preferencia por mecanismos de gobernanza que permitan una participación continua y con capacidad de incidencia. El 96% de la muestra considera que los mecanismos de gobernanza multiactor podrían ser el canal más adecuado para fortalecer la participación de las OSC en sistemas digitales públicos, seguido por las redes regionales de articulación entre OSC (77%).

Las respuestas evidencian una preferencia por mecanismos de gobernanza que permitan una participación continua, institucionalizada y con capacidad de incidencia, por encima de espacios puntuales de consulta o de socialización. Este resultado sugiere que las organizaciones no buscan únicamente ser informadas o consultadas sobre decisiones previamente definidas, sino también participar de manera más activa en los procesos de diseño, implementación, supervisión y evaluación de las DPI.

El hallazgo anterior tiene una estrecha relación con la percepción que tienen las OSC frente al rol que deben desempeñar en los procesos de gobernanza de DPI. Las respuestas muestran una fuerte preferencia por funciones asociadas a la incidencia, la supervisión, la veeduría, la participación en el diseño y la representación de las necesidades de la ciudadanía. El rol esperado de la sociedad civil se concentra en la supervisión y veeduría (81%), el rol consultivo (69%), la auditoría técnica (35%), la participación central en la toma de decisiones (35%) y la auditoría contractual (19%).

6.6 Casos de uso e iniciativas de DPI en la región

Casos de uso más conocidos y principales aprendizajes

En las entrevistas, se evidencia que los casos de uso más conocidos en LAC son PIX en Brasil, Bre-B en Colombia y RENIEC en Perú. Aunque estas experiencias difieren en materia de gobernanza, sostenibilidad, nivel de adopción, son percibidas como referentes relevantes para comprender el potencial y los desafíos asociados.

Entre los principales aprendizajes identificados, se resalta la oportunidad de estos sistemas para convertirse en infraestructuras críticas para la provisión de servicios y acompañar transformaciones de largo alcance: *“Como aprendizaje, creo que nos muestra que puede haber ciertos servicios públicos, servicios digitales, mejor dicho, que pueden volverse críticos”*

No obstante, también se perciben riesgos en torno a estos casos de uso. Varias personas entrevistadas señalaron preocupaciones relacionadas con la limitada participación de la sociedad civil en los procesos de diseño y gobernanza, así como interrogantes sobre transparencia, inclusión y soberanía digital. En particular, se plantearon cuestionamientos sobre quién controla estas infraestructuras y cuáles son las implicaciones de la dependencia tecnológica para la autonomía de los países: *¿Quién tiene el control de estas infraestructuras? (...) “Podría impactar el nivel de influencia que tiene un actor político acá, por ejemplo, Estados Unidos”.⁴*

Brechas entre conocimiento y participación

Frente a las encuestas, el 46% de los encuestados conoce casos de uso de DPI en la región. Mientras el 23% no identifica ninguno, el 27% conoce casos de uso de manera parcial y el 4% no está seguro/a. Sin embargo, cuando se les preguntó a las OSC si habían participado en alguno de estos casos de uso, el 70% respondió que no; mientras, el 30% respondió que sí.

Este resultado evidencia una brecha entre el conocimiento de las experiencias de DPI y la participación efectiva de la sociedad civil en su desarrollo o implementación. Aunque una proporción importante de organizaciones está familiarizada con estas iniciativas, pocas han tenido la oportunidad de involucrarse directamente en ellas.

⁴ Frase tomada literalmente de una de las entrevistas del estudio

Entre las organizaciones que conocen casos de estudio, las experiencias más conocidas son las de sistemas de identidad digital y de firmas electrónicas (14 organizaciones), seguidas de sistemas de pagos digitales (12 organizaciones) y de sistemas de intercambio de datos (11 organizaciones). Frente al rol que pueden tener las OSC sobre casos de uso, estas identifican su principal valor agregado no en el desarrollo tecnológico de las infraestructuras, sino en la construcción de capacidades para la sociedad civil (77%), la gobernanza multiactor (73%), la elaboración de principios y derechos ciudadanos (62%), la movilización sobre derechos digitales y veeduría (54%) y la producción de evidencia e investigación (46%).

6.7 Capacidades y barreras para la participación en DPI

Capacidades para participar en el ecosistema de DPI

Las organizaciones de la sociedad civil perciben que cuentan con capacidades intermedias para incidir en el ecosistema de DPI con una valoración promedio de 3,3 sobre 5. Las organizaciones de alcance regional presentan la percepción más positiva de sus capacidades actuales (3,43 sobre 5), seguidas por las organizaciones nacionales (3,33 sobre 5). Las organizaciones globales muestran una valoración ligeramente inferior (3 sobre 5). Entre las capacidades organizacionales evaluadas, la incidencia y la articulación se presentan como la principal fortaleza, con una valoración promedio de 3,9 sobre 5. Por el contrario, los recursos financieros constituyen la dimensión más débil (1,9), seguidos de los recursos humanos (2,8). El conocimiento técnico especializado en DPI (3,1) y la estructura organizacional (3,2) presentan niveles intermedios de desarrollo.

El análisis por alcance geográfico revela que las organizaciones de la sociedad civil con alcance regional y global identifican su capacidad de incidencia (4,1) mucho más alta que la de las de alcance nacional (3,6). Lo anterior, sugiere una ventaja comparativa para participar en procesos de articulación o incidencia relacionados con DPI.

Necesidades de fortalecimiento

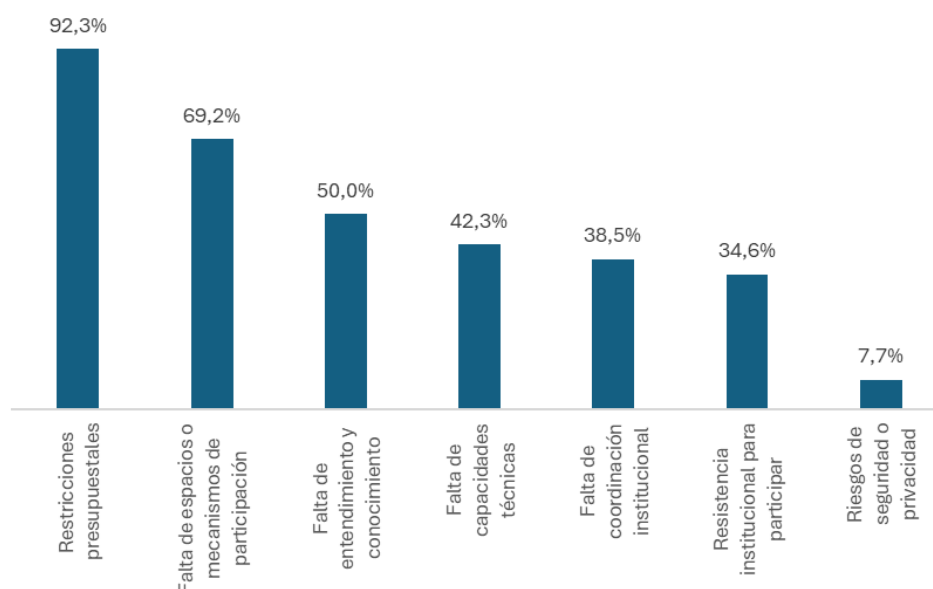
Las principales necesidades identificadas por las OSC son financiamiento (69%), espacios de articulación y redes regionales (62%), formación técnica (58%), formación en gobernanza de sistemas (58%), acceso a información técnica (42%) y acceso a información sobre adquisición y despliegue (31%). Estos hallazgos sugieren que el principal desafío para ampliar la participación de las OSC en la agenda de DPI no es el interés en sí mismo, sino la creación de condiciones institucionales, técnicas y financieras que permitan convertir ese interés en una participación efectiva.

Barreras para la participación efectiva

La existencia de barreras es ampliamente reconocida: el 89% de las organizaciones respondieron que sí existen barreras para que la sociedad civil participe en los procesos de diseño, despliegue y desarrollo de servicios digitales compartidos. Aunque existen diferencias menores entre grupos según el alcance geográfico, las barreras son reconocidas transversalmente por organizaciones nacionales, regionales y globales.

Las principales barreras identificadas son las restricciones presupuestarias, la falta de espacios o mecanismos de participación, la falta de comprensión y conocimiento sobre estos temas, la falta de capacidades técnicas, la falta de coordinación y la resistencia institucional a la participación. Esta información también se identificó en las entrevistas con las OSC.

Gráfica 1. Barreras que afectan la incidencia de las OSC en el ecosistema de DPI



La percepción de barreras por alcance geográfico revela que las organizaciones nacionales enfatizan financiamiento, capacidades técnicas y conocimiento, Las organizaciones regionales enfatizan financiamiento y espacios de participación y Las organizaciones globales enfatizan la falta de espacios de participación, y el financiamiento.

Esto podría indicar que las necesidades de fortalecimiento varían según el grado de inserción de las organizaciones en los ecosistemas de gobernanza digital. Mientras algunas requieren fortalecer capacidades básicas, otras demandan mecanismos más eficaces para influir en los procesos de toma de decisiones.

6.8 Habilitadores de DPI y bienes públicos digitales

Los habilitadores críticos más mencionados son gobernanza institucional coordinada, estándares abiertos e interoperabilidad, financiamiento sostenible, capacidades institucionales y técnicas, participación y supervisión multiactor. Esta priorización muestra que las organizaciones entienden DPI como un sistema sociotécnico: no basta con construir plataformas; se requieren reglas, capacidades, estándares, sostenibilidad financiera, participación y mecanismos de control.

La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil ha trabajado en la agenda de datos abiertos (88%), gobernanza y protección de datos (88%), documentación pública y accesible (85%) y leyes y normativas digitales (77%). Esto constituye un hallazgo importante respecto de la posibilidad de incidir en una agenda en la que las OSC ya vienen trabajando desde hace tiempo.

En las entrevistas, se identificó un optimismo generalizado frente a las capacidades de las OSC en el desarrollo de habilitadores de DPI, teniendo en cuenta que en LAC se han desarrollado agendas, iniciativas y estrategias muy relevantes en materia de datos abiertos y gobierno abierto que pueden contribuir a crear un puente con la agenda de DPI.

6.9 Garantías, riesgos y derechos humanos

Percepción amplia sobre los riesgos de DPI

Las organizaciones de la sociedad civil reconocen de manera amplia que la implementación de Infraestructuras Públicas Digitales puede generar riesgos significativos para la ciudadanía. El 85% de las organizaciones considera que el desarrollo de servicios digitales públicos implica potenciales afectaciones que deben gestionarse de manera preventiva mediante mecanismos adecuados de gobernanza y salvaguardas.

Los riesgos identificados para la región se concentran en la privacidad y la protección de datos (96%), la discriminación racial, socioeconómica y de género (96%), la exclusión de personas o grupos durante el diseño o el despliegue (82%), las vulnerabilidades de seguridad digital (82%), el acceso desigual a la información (59%) y la falta de empoderamiento ciudadano en materia de datos y derechos humanos (59%).

Las entrevistas complementan estos hallazgos al señalar que los riesgos asociados a la DPI no deben analizarse desde una perspectiva limitada a derechos específicos, sino desde una visión integral de los derechos humanos. Las personas entrevistadas enfatizaron que cualquier derecho puede verse afectado por el diseño, la implementación o la gobernanza de las infraestructuras digitales cuando estas no incorporan principios adecuados de inclusión, transparencia y rendición de cuentas.

Salvaguardias y mecanismos de mitigación

La familiaridad con los marcos institucionales de mitigación de riesgos es moderada con un promedio de 3,2. Esto abre una oportunidad directa para conectar la agenda de DPI con marcos de salvaguardas, evaluaciones de impacto en derechos humanos, auditorías ciudadanas, gobernanza de datos, ciberseguridad y mecanismos de reparación. De hecho, los marcos de gobernanza multiactor (46%) se consideran el principal mecanismo o herramienta para mitigar los riesgos derivados de DPI, seguido de fortalecimiento de capacidades institucionales (27%), fortalecimiento de capacidades de sociedad civil (12%) y de adopción e implementación de marcos regulatorios (12%).

DPI y enfoque de derechos humanos

En las entrevistas, se hizo hincapié en la necesidad de involucrar a organizaciones de la sociedad civil que no trabajen en la agenda digital, pero que aborden asuntos muy relevantes en materia de derechos humanos, como las problemáticas migratorias, las violencias de género, el cambio climático, la justicia, entre otras. Algunos participantes de las entrevistas resaltaron que las OSC que trabajan en temas digitales pueden contribuir a difundir, sociales y visibilizar la importancia de la agenda de DPI y conectar sus temas con asuntos de interoperabilidad, digitalización, entre otras. También, se resaltó la necesidad de pasar a mecanismos o acciones concretas que permitan materializar los principios de garantías de derechos humanos en acciones concretas y así lograr aterrizar en el diseño de soluciones digitales.



7. Conclusiones generales del análisis

- Existe una demanda de fortalecer la claridad conceptual en torno a la DPI. Varias organizaciones señalan la necesidad de precisar qué significa este concepto, cómo se diferencia de agendas relacionadas, como el gobierno digital, los datos abiertos o los bienes públicos digitales, y de qué manera se articula con temas como la IA, la interoperabilidad, los servicios digitales y los derechos humanos.
- Las organizaciones reclaman una participación significativa, no meramente consultiva: se mencionan espacios vinculantes, mesas multiactor, observatorios, auditorías, mecanismos de supervisión independiente y participación desde etapas tempranas.
- La sociedad civil observa riesgos concretos en materia de privacidad, discriminación, exclusión y seguridad digital. Esto refuerza la necesidad de incorporar salvaguardas desde el diseño y no como un componente posterior.
- Se destaca la preocupación por la sostenibilidad y el financiamiento de la participación: varias respuestas sugieren que asumir roles de veeduría, auditoría o formación requiere recursos específicos destinados a la sociedad civil.
- Se propone aprovechar los espacios regionales existentes, como foros de gobernanza de internet, agendas de gobierno abierto, e-LAC, redes de datos abiertos y comunidades de práctica, en lugar de crear procesos aislados.
- Ante la agenda de DPI, las organizaciones de la sociedad civil expresan preocupaciones sobre la protección de los derechos humanos y la incorporación efectiva de salvaguardas en las distintas fases del ciclo de vida de estas infraestructuras. Estas preocupaciones también reflejan el riesgo de que la agenda sea impulsada desde marcos externos a la región sin reconocer plenamente las experiencias, capacidades y espacios de participación ya construidos en Latinoamérica y el Caribe. Asimismo, las OSC enfatizan la importancia de promover modelos de DPI sostenibles en el tiempo con mecanismos de gobernanza inclusivos que permitan incorporar las perspectivas de múltiples actores, especialmente, de grupos históricamente excluidos.



8. Glosario de términos

- **Infraestructura Pública Digital:** Conjunto de bloques tecnológicos basados en estándares y especificaciones abiertas e interoperables, operados bajo un conjunto de reglas habilitantes, con una gobernanza abierta, transparente y participativa, para impulsar la innovación, la inclusión y la competencia a gran escala (CDPI, 2026).
- **Bienes Públicos Digitales:** Los DPG son software de código abierto, datos abiertos, modelos de IA abiertos, estándares abiertos y contenido abierto que siguen las reglas de privacidad y otras leyes, normas y buenas prácticas internacionales y locales, y no causan daño (Digital Public Goods Alliance, 2026)
- **Soberanía Digital:** La soberanía digital, la soberanía cibernética, la soberanía tecnológica y la soberanía de los datos se refieren, en términos generales, a la capacidad de una sociedad, organización o Estado para mantener un grado de control y autonomía sobre su propio destino digital, incluyendo los datos, las infraestructuras tecnológicas, el hardware, el software y los sistemas de los que depende y que desarrolla. (basado en la definición de World Economic Forum, 2025)
- **Infraestructura crítica:** La infraestructura crítica comprende los sistemas, activos y redes que son esenciales para el funcionamiento de la economía y para garantizar el bienestar y la provisión de servicios fundamentales a la población (OCDE, 2025)
- **Habilitadores de DPI:** Los habilitadores de la Infraestructura Pública Digital (DPI) son los componentes técnicos, legales y de gobernanza fundamentales que permiten a las sociedades desplegar sistemas interoperables, como la identidad digital, los pagos rápidos y el intercambio seguro de datos. Entre los principales habilitadores se encuentran los estándares abiertos, marcos sólidos de protección y privacidad de los datos, la infraestructura en la nube, el liderazgo político y la cooperación entre el sector público y privado (World Economic Bank, 2025)
- **Ecosistema de DPI:** Conjunto de tecnologías, sistemas, leyes y regulaciones, capacidades, instituciones y marcos necesarios para el despliegue, la adopción y la protección integral de los servicios digitales (World Bank, 2026).
- **Gobernanza participativa:** Enfoque de gobernanza que define procesos y mecanismos para garantizar la participación, incidencia y toma de decisiones por parte de diferentes actores del ecosistema digital alrededor de asuntos de interés común (definición propia)
- **Entendimiento sobre DPI:** Capacidad de apropiar un concepto y relacionarlo con elementos complementarios
- **Conocimiento sobre DPI:** Conjunto de conceptos, información y definiciones asociadas a un temática determinada, en este caso DPI.

- **Capacidades:** Conjunto de conocimientos, recursos, herramientas y condiciones organizacionales que le permiten a una organización o entidad realizar un conjunto de actividades o acciones con diferentes propósitos.
- **Incidencia:** Capacidad y acción de la ciudadanía y de las organizaciones sociales para participar y transformar de forma activa las decisiones, las políticas, normas, diseños, prioridades o mecanismos de gobernanza relacionados con la DPI. (Definición adaptada de OGP)